

ASPECTOS PSICOSOCIALES Y SOCIOPOLÍTICOS EN TORNO AL DESASTRE DEL “PRESTIGE”

Ricardo García Mira¹

*Unidad de Investigación Persona-Ambiente
Universidade da Coruña

En noviembre de 2002, el *Prestige* se hunde en el Atlántico vertiendo miles de toneladas de fuel pesado que alcanza la costa gallega, el Norte peninsular y el Oeste francés. El desastre, el mayor que se recuerda en Europa de esta categoría, produce un daño ecológico difícil de reparar, además de una respuesta social sin precedentes caracterizada por importantes movilizaciones públicas.

La ausencia de información sobre la amenaza para la población o para el sistema ecológico, así como la respuesta del Gobierno tendente a minimizar el riesgo desde el primer momento, unido al hecho de que con anterioridad al hundimiento, el buque estuviera perdiendo petróleo a 3 millas de la costa, mientras el Gobierno informaba de su situación a más de 40 millas, provocó una seria crisis en la credibilidad institucional.

La información proporcionada por otras organizaciones sociales, grupos ecologistas y otros organismos franceses y portugueses, por un lado, y el claro posicionamiento de determinados medios de comunicación apostando por proporcionar información bastante veraz de lo sucedido, permitió un claro entendimiento de la naturaleza del desastre y su amenaza, así como de sus efectos sobre la economía, la ecología o el empleo, y proporcionaron una base sólida para la movilización colectiva.

Por otro lado, la atribución inicial de responsabilidad al Gobierno, quien al minimizar el impacto de la tragedia, se incapacitaba para ejercer un claro liderazgo en la gestión de la crisis, favoreció el desarrollo de la movilización social a través de plataformas de acción ciudadana y la aparición de colectivos diversos que coordinaron la gestión de la crisis desde distintos puntos de Galicia.

La respuesta colectiva tuvo importantes ventajas, a pesar de la actitud gubernamental de censura contra la plataforma ciudadana “Nunca Mais”, que lideró una parte importante de la protesta social. La respuesta pública, bien organizada, hizo aumentar el apoyo social y la solidaridad procedente tanto de otras comunidades del Estado como de los miles de voluntarios procedentes de diferentes partes de España y otros países europeos. También supuso una importante presión sobre el Gobierno en demanda de una adecuada gestión de la contaminación y limpieza de la costa. La respuesta del Gobierno, en definitiva, trató de reducir la vitalidad del movimiento social generado, e intentó el debilitamiento de las redes sociales emergentes, así como la división de la

¹ Dirección del autor: Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de Elviña, s/n. 15071 A Coruña, España.
E-mail: fargmira@udc.es

respuesta comunitaria con el fin de minimizar, con toda probabilidad, el impacto del desastre sobre las elecciones locales que tuvieron lugar en mayo de 2003.

Una actitud como ésta, precisamente, constituye justo lo que no se puede ni debe hacer. Las redes de apoyo social constituyen uno de los componentes más importantes para la comunicación y recuperación en desastres de este tipo, y el hecho de que hubiera habido un intento de debilitamiento, constituye un hecho grave y preocupante porque una red de apoyo social fracturada o debilitada, entre otras cosas, puede forzar una percepción de baja capacidad para afrontar amenazas futuras, lo que redundaría en la irresponsabilidad de este tipo de actuaciones.

La presión y la protesta social, respaldada por algunos medios de comunicación, constituyeron factores importantes en la organización posterior del voluntariado de modo institucional o en la aprobación de un plan denominado "Plan Galicia" de promesas de infraestructuras y proyectos para Galicia.

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes en la gestión ambiental de la crisis tuvo que ver con el modo en que la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los canales públicos de la TV se vieron afectadas. Como señalan Williams *et al.* (1999), estas variables constituyen condiciones indispensables para garantizar la gestión efectiva en aquellos lugares más afectados por el desastre, es decir, en aquellos lugares a los que llegó de un modo más agresivo el chapapote. Cuando no existe credibilidad o confianza, es muy difícil convencer a los ciudadanos sobre la seguridad del lugar para que pueda ser utilizado nuevamente, en este caso, para autorizar la pesca de nuevo en los distintos caladeros. La confianza y credibilidad pública, dado su carácter dinámico, poseen determinantes muy diversos, basados en la percepción de experiencia y en el conocimiento, pero también en el grado de información revelado, en la honestidad, en la franqueza o en la misma sensibilización de los medios de comunicación con el problema (véase Peters *et al.*, 1997, cf. Williams *et al.*, 1999).

El tiempo que el contaminante está presente entre los ciudadanos es otra característica a tener en cuenta, al ser un mediador importante en el proceso de respuesta social (véase Evans & Cohen, 1987; Otway & von Winterfeldt, 1982; Slovic, 1987; o García-Mira *et al.*, 2004, en prensa). Una de las prioridades, una vez que el Gobierno se hizo cargo de la gestión de la crisis, fue la limpieza de playas a fin de eliminar la presencia, al menos visual, del chapapote en los arenales, labor que continúa todavía hoy.

Finalmente, los desastres, a la larga, pueden tener un doble impacto. Por una parte, el impacto físico que resulta del desastre en sí mismo y, por otra, el impacto social que viene dado por los problemas sociales generados durante un tiempo determinado. Nuestro trabajo reveló que la duración percibida de la amenaza se relacionó con las consecuencias económicas negativas percibidas y con la efectividad positivamente valorada con la que marineros y pescadores afrontaron el desastre y con la efectividad negativamente percibida de la respuesta gubernamental.

La investigación

A la vista de todo ello, desde la Unidad de Investigación Persona-Ambiente de la Universidad de A Coruña, con la colaboración de investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Surrey, de Psicología Social de las Universidades del País Vasco y Barcelona, y de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Santiago de Compostela, impulsó una evaluación de impacto social que clarificara, desde una perspectiva aplicada, la dimensión de la percepción pública. El objetivo fue conocer el grado de afectación de la población y elaborar un diagnóstico del desequilibrio social generado. Se analizó, asimismo, la atribución de responsabilidad, la fiabilidad y credibilidad de diferentes instituciones públicas y otras fuentes de información y se exploraron las representaciones cognitivas de los ciudadanos².

Se entrevistó a 1652 ciudadanos, por un sistema de rutas aleatorias, utilizando un protocolo de Evaluación de Impacto Social especialmente diseñado para esta ocasión, que permitió recoger información sobre: a) variables sociodemográficas; b) comprensión de la situación y modo de obtención de información; d) confianza y credibilidad institucional; e) atribución de responsabilidades; f) percepción de consecuencias; g) satisfacción con la respuesta al desastre; h) percepción de eficiencia de las acciones desarrolladas; i) duración percibida de la amenaza; j) algunos aspectos relativos a la salud; y k) implicaciones sobre el cambio de comportamientos.

Algunos resultados

Las primeras reacciones fueron claras. Considerando la muestra en su conjunto, el 46% de la población declaraba haberle afectado "mucho" este accidente, al lado de un 37% que declaraba haberle afectado "bastante" (un 83% en total). Igualmente, la mitad de la población comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo (48%), mientras un 25% declaró "entender algo".

La credibilidad de la información institucional se vió seriamente afectada. Un análisis multidimensional de un total de 13 entidades, permitió obtener un espacio bidimensional que reflejó claramente estas dimensiones de credibilidad y confianza cuestionando aquella referida a los políticos estatales y los canales públicos de la TV, mostrando también una mayor confianza en la prensa escrita o en los políticos de ámbito local.

La principal responsabilidad fue atribuida al Gobierno del Estado, que se llevó el 55,48% de las respuestas. Mayoritariamente, y con plena claridad empírica, la gente asumió que las causas del accidente habían sido políticas (57,9%), frente a otras causas de tipo natural o tecnológico.

² Un informe más preciso puede consultarse en la página www.udc.es/dep/ps/grupo/index.html

Un análisis de las consecuencias sobre las que el *Prestige* tendría un impacto preocupante dio como resultado que la ecología, la economía o el empleo formaron el eje que explicó la percepción pública.

La satisfacción con la respuesta institucional estuvo profundamente cuestionada. Hubo dos aspectos entre los que discriminaron los ciudadanos. Un primer aspecto relacionado con la insatisfacción con la respuesta gubernamental en relación con satisfacción sentida hacia voluntarios y personas relacionadas con el mar, y un segundo aspecto relacionado con la satisfacción por la respuesta dada por vecinos, empresas locales, gobierno local y ecologistas. En cuanto a la efectividad percibida, la labor (positiva) de voluntarios, pescadores, marineros, ecologistas, armadores, la plataforma "Nunca Más", los vecinos y las cofradías discriminó de la labor (negativa) respecto a la acción de instituciones gubernamentales.

Para un tercio de los entrevistados, el suceso hizo que se implicaran en actividades distintas a las habituales (acciones de protesta, voluntariado, etc). La salud se vio afectada en un 30%, en aspectos relacionados con alergias, problemas respiratorios, alteraciones cutáneas o temor al cáncer, siendo mínimo el porcentaje de personas que acudieron a un profesional de la salud para consultarse. Finalmente, un 25% declaraba su intención de cambiar su voto en las próximas elecciones, aspecto éste que se cumplió parcialmente, apareciendo influido por las indemnizaciones que el Gobierno gestionó con agilidad y generosidad.

Discusión

El lento desarrollo de Galicia, comparado con otras comunidades españolas, la tendencia histórica a la resignación identificada en la expresión "*malo será...*", y el sentimiento de una Galicia históricamente olvidada vinculada al sentimiento general de que "*ya está bien*", de que "*hasta aquí*", etc, probablemente favoreció el uso de métodos de afrontamiento públicos como la participación en movimientos de protesta social, más que optar por una respuesta únicamente individual.

Como señalamos en otro lugar (García Mira *et al.*, 2004, en prensa), un aspecto a tener en consideración es que las personas desarrollan su propio sistema de creencias sobre la naturaleza del riesgo que resulta del desastre, como una parte del proceso de afrontamiento. Tal como señalaron Berger y Luckmann (1966), las creencias se construyen socialmente y están influidas por la interacción de factores individuales, sociales, culturales, políticos y económicos, además de las características propias del contaminante. En esta investigación tomamos en consideración las creencias sobre la duración de la contaminación, los efectos sobre la salud o el alcance del desastre, pero también hemos hecho uso de las atribuciones que hicieron los ciudadanos sobre la acción y efectividad institucional para gestionar la crisis, lo que dio lugar a una percepción de desconfianza y una falta de credibilidad institucional, aspectos surgidos como consecuencia de una construcción colectiva, por sí, o quizá en combinación con algún tipo de elaboración individual (véase Williams *et al.* 1999).

En cuanto a las ayudas, una recuperación psicosocial satisfactoria (véase Bolin, 1988) estaría relacionada con una percepción positiva de estas ayudas por parte de los afectados. Sin embargo, si la ayuda institucional es percibida como inadecuada o negativa, el impacto psicosocial podría prolongarse más allá. Por eso, la gestión de consecuencias de un desastre debe incluir servicios de apoyo que integren no sólo estrategias económicas o tecnológicas, sino también psicológicas y sociales.

Esta investigación trata de contribuir a incrementar el número de estudios sobre procesos psicológicos implicados en la gestión del riesgo y, a la vez, trata de ser un elemento de apoyo al desarrollo de políticas y programas de ayuda al proceso de respuesta de las comunidades a riesgos y amenazas ambientales.

Referencias

- Berger, P.L. & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Nueva York: Penguin.
- Bolin, R. (1988). Response to natural disasters. In M. Lystad (Ed.), *Mental health responses to mass emergencies*. Nueva York: Bruner Mazel.
- Evans, G. & Cohen, S. (1987). Environmental stress. In D. Stokols & I. Altman (Eds.), *Handbook of Environmental Psychology* (pp. 571-610). Nueva York: John Wiley.
- García Mira, R.; Real, J.E.; Uzzell, D.; San Juan, C. & Pol, E. (2004, en prensa). Doping with a threat to quality of life: the case of the Prestige-disaster. *European Review of Applied Psychology*.
- Otway, H.J. & von Winterfeldt, D.V. (1982). Beyond acceptable risk: On the social acceptability of technologies. *Policy Sciences*, 14, 247-256.
- Peters, R.G., Covello, V.T. & McCallum, D.B. (1997). The determinants of trust and credibility in environmental risk communication: An empirical study. *Risk Analysis*, 17 (1), 43-54.
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236, 280-285.
- Williams, B.L., Brown, S. & Greenberg, M. (1999). Determinants of trust perceptions among residents surrounding the Savannah River Nuclear Weapons Site. *Environment & Behavior*, 31, 354-371.